

Tráfico de armas: crónica de un negocio mortal

ALONSO RABÍ DO CARMO

Cada año mueren 450 mil mujeres y menores por disparos de armas ligeras de calibre pequeño. Y se estima que, actualmente, circulan unos 500 millones de unidades de estas armas de fuego en todo el mundo, prácticamente una por cada doce habitantes. Pero hay más números. Anualmente, las transacciones de compraventa de armas ligeras llegan a casi 22 mil millones de dólares y 1 300 personas pierden la vida cada día como consecuencia de su uso.

Por otro lado, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, las armas ligeras fueron utilizadas preferentemente en 101 conflictos entre 1989 y 1996 y de acuerdo con sus estimados, podrían haber causado la muerte de más de 3 millones de personas en ese período. Si bien las cifras son frías, nos dan una idea de la dramática dimensión que tiene el tema y de la dolorosa paradoja que se esconde detrás de la «desmilitarización de los conflictos», paradoja que consiste en comprobar que la mayoría de víctimas son civiles.

El problema más agudo para enfrentar esta situación es el de los diversos vacíos legales y normativos en torno a la materia. La comunidad internacional muestra una preocupación reciente (las conferencias de Naciones Unidas sobre el tema son un ejemplo) y organizaciones como Amnesty International, Greenpeace y Médicos Sin Fronteras, por citar tres, contribuyen a denunciar y analizar el problema desde sus respectivas áreas de acción.

En general existe el consenso de adoptar medidas más estrictas en el combate del tráfico de armas ligeras. La Unión Europea es bastante explícita en el deseo de acabar con esa plaga social que es el comercio ilícito de armas ligeras.

En el ámbito regional, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, los costos directos e indirectos de la violencia por causa de armas ligeras pueden llegar hasta 170 mil millones de dólares al año. Solo en Guatemala, por ejemplo, entre los años 2000 y 2004, han ingresado al país casi 100 mil armas, entre revólveres y fusiles.

LA PRODUCCIÓN DE LA MUERTE

Es evidente que en contextos de violencia y conflicto el tráfico se agudiza más, pues generan de manera casi automática una intensa circulación de armamento. En este momento el arsenal mundial consta de 500 millones de armas de fuego, sin contar el armamento destinado a las fuerzas policiales y los cuerpos de seguridad en general.

Si en el pasado los dos grandes productores de armas ligeras fueron la Unión Soviética y los Estados Unidos, hoy son muchos más los países que se dedican a la fabricación y comercialización de armamento, lo que dificulta un seguimiento y combate eficaz del tráfico. El Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación en Temas de Desarme, hoy por hoy, ha logrado identificar a unas trescientas empresas, repartidas en 52 países, que se dedican a fabricar armas ligeras. Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Reino Unido, Rumania, Rusia, Singapur y Sudáfrica se cuentan entre los principales productores.

No se cuenta con cifras exactas acerca del valor de esta producción, pero se calcula que supera los 6 mil millones de dólares anuales, lo que significa una octava parte del valor total del comercio de armas en el mundo. La dificultad, por otro lado, se incrementa cuando la marcha de este negocio nos revela que muchas veces se apela al sistema de trueque por drogas, materia prima u otros recursos, lo que esconde aún más la verdadera valoración tanto de la fabricación como de la venta. Esto puede suceder en los intercambios gubernamentales o bien en el mercado negro. Si la fabricación de armas es preocupante, también lo es la de municiones. Se sabe que la industria europea fabrica hasta tres veces su propia demanda de municiones, esto es, un promedio de entre mil y dos mil millones de cartuchos. Lo único que ha provocado este auge industrial ha sido el aumento de la letalidad, el alargamiento de los conflictos y también el aumento de la dificultad para resolverlos.

Según refiere Greenpeace-España, «La acumulación de centenares de miles de millones de armas que se producen durante una guerra hipotecan la paz, ya que este arsenal es desviado y aprovechado por grupos terroristas, paramilitares, guerrillas, grupos criminales, cuerpos de seguridad o ex

combatientes. Esta acumulación produce un circuito vicioso de inseguridad y violencia».

COLOR LOCAL

Entre una dictadura y el tráfico de armas hay casi una relación natural. Prácticamente no ha existido una tiranía que, directa o indirectamente, no haya tenido alguna relación con este delito. El gobierno de Fujimori no fue una excepción, como demuestra el actual proceso por tráfico de armas a las FARC colombianas que enfrenta Vladimiro Montesinos, el oscuro ex asesor presidencial. Y aunque es de lamentar que los procesos más importantes en su contra no sean por violaciones a los derechos humanos este, mal que nos pese, es el proceso más importante que se le sigue, al menos en cuanto a la posible pena que le espera.

La entronización de antivalores como principio de gobierno, por un lado; y, por otro, la maquinaria de corrupción que instalaron y activaron Fujimori y Montesinos nos llevaron a tocar fondo. Tanto, que un gobierno que se ufano siempre de la efectividad de su política antiterrorista —sin importar la crueldad o insanía con que se aplicara— terminó por fungir de intermediario entre Jordania y la clientela colombiana de Montesinos. Definitivamente, este no era un hecho aislado; mucho menos un favor ocasional a un grupo de vecinos que había decidido ponerse del lado de la irracionalidad y el delito. Al contrario, fue una operación absolutamente coherente con la condición de baja moralidad del fujimontesinismo.

Resulta curioso, por decir lo menos, que un país como Jordania, invocado más de una vez como un modelo político y social por Fujimori, sea una especie de «oficina de negocios» para los principales traficantes de armas del mundo, uno de los cuales, Sarkis Soghanalian, tuvo participación directa en el caso que vincula a Montesinos con las FARC. Dotado de contactos de alto nivel en el gobierno y ejército jordanos, cosa que incluía una gran amistad con el fallecido Rey Hussein, Soghanalian tenía prácticamente carta libre para operar en dicho territorio. Operaciones como vender a países del Tercer Mundo los tanques viejos del ejército jordano, previo reacondicionamiento, contaron siempre con el beneplácito de las autoridades jordanas. Lo mismo ocurrió con el envío de 10 mil fusiles rusos a las FARC, operación

en la que intervinieron diligentemente militares peruanos, bien manejados por Montesinos.

El escándalo, que estalló en agosto de 2000, sigue resonando hoy con nuevos detalles y pruebas concluyentes que cada vez dejan menos dudas de la participación de Montesinos y el consentimiento de Fujimori en este caso, así como de la actuación de Soghanalian en la venta del armamento. No queda sino mirar con una sonrisa de pasmo aquella burda conferencia de prensa en la que Montesinos y Fujimori informaban de la desarticulación de una banda de traficantes de armas peruanos en Iquitos.

La ruta de los fusiles de las FARC comenzaba en Amman, Jordania; luego venía una escala en las Islas Canarias, otra en Guyana y finalmente la ciudad de Iquitos, de donde salían aviones que arrojaban la carga en paracaídas sobre territorio colombiano. Los diez mil fusiles fueron enviados a Colombia en marzo, abril y julio de 1999. Y todavía aterra la impavidez de Montesinos al decir que se había detectado a un militar peruano que había fraguado documentos del Ministerio de Defensa con los que logró firmar contrato en Jordania.

La famosa «desactivación» fue saludada de buena fe por parte de la poca prensa independiente que quedaba en el Perú a agosto de 2000, tomada con suspicacia por otros medios opositores al régimen —¡cuánta razón tuvieron!—, elogiada hasta la genuflexión por los medios comprados por el régimen y acogida con beneplácito por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, que no escatimaron en poner de relieve el trabajo efectuado por el SIN. Esta será una de las más grandes patrañas de la historia del Perú. Después vendría una amañada protesta ante el gobierno jordano y así todo se iba tiñendo de un perverso simulacro.

La algarabía oficialista no duraría mucho, sobre todo después de que Fujimori reconociera la compra de armas a Jordania como una operación legal, pero, según dijo en aquella época (27/8/2000), llevada a cabo por unos subalternos.

Lo que vendría después es cosa conocida: el derrumbe del fujimorato, la extradición de Montesinos, las investigaciones de una procuraduría valiente y eficaz —que ya demostró que todo esto no fue sino una gran «finta», un calculado montaje psicosocial— y el actual proceso por tráfico de armas en el que el acusado central es Vladimiro Montesinos. Es de esperar que al

final del proceso, este personaje reciba una condena que esté a la altura de la frialdad con que organizó el tráfico de armas a las FARC y del desparpajo con que mintió no solo al país, sino al mundo. Así sea.